



## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

Medellín, Marzo 22 de 2024

Radicados: 05001- 31- 05-026-2023-00585-01  
Demandante: JUAN SEBASTIÁN TOBÓN LOAIZA  
Demandados: COLPENSIONES Y LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ NORTE DE SANTANDER  
Asunto: RECHAZO DE LA DEMANDA- FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA

La Sala Quinta de decisión, integrada por el Dr. DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN como ponente en este trámite y las magistradas SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE procede a resolver el recurso de apelación interpuesto, estando acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado.

### **ANTECEDENTES**

Para lo que este trámite interesa, se tiene que el actor pretende se ordene a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su señora madre de la pensionada Nora Eugenia Loaiza, para ello afirma que se halla en condición de invalidez y por tanto debe dejarse sin efectos el dictamen practicado por la Junta Regional de Calificación de invalidez.

En auto del 7 de noviembre de 2023 se devolvió la demanda para enmendar algunos defectos en las pretensiones y se acreditara la satisfacción de la previa reclamación administrativa de que trata el artículo 6° del CPTSS, advirtiéndole que

aquel documento aportado no cumplía las condiciones ya que lo único que se generó fue el requerimiento para ajustar la solicitud.

En respuesta, la activa reformuló el escrito de demanda, suprimió algunas pretensiones y relativo a la reclamación administrativa, sostuvo que aquel trámite adelantado cumplía las reglas del artículo 6° del CPTSS en tanto solo se exige “*e/ simple reclamo*” sin formalidades adicionales.

Consideración que no fue validada por el fallador de instancia y en providencia del 20 de noviembre de 2023 rechazó la demanda al estimar que no se satisfizo la previa reclamación (archivo N° 5)

### **APELACIÓN**

Inconforme con la decisión la activa insistió en la suficiencia de la reclamación al considerar que las premisas del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 que regla los eventos de peticiones incompletas en el caso de Colpensiones responde comportan “*formalidades que en nada van a cambiar con la respuesta ya emitida, pues según el comunicado enviado por Colpensiones, se exigía una cantidad de documentos que fueron presentados como anexo a la solicitud, sin que se presentara el formulario de prestación económica, que al final de cuentas donde se hubiese presentado, el igual sentido la respuesta por parte de COLPENSIONES, seria negando el reconocimiento de la sustitución pensional*” (archivo N° 6- primera instancia).

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la accionada presentó escrito donde ratifica los argumentos de disenso.

### **CONSIDERACIONES**

Corresponde a esta corporación resolver el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, asunto que es susceptible del medio de impugnación en

los términos del numeral 1° del artículo 65 del CPTSS, lo que habilita a esta corporación para pronunciarse, siendo entonces el problema jurídico determinar si la activa cumplió con la previa reclamación administrativa.

Para resolver los reparos, pertinente resulta remitirnos al concepto de reclamación administrativa, consagrado en el artículo 6° del CPTSS que enseña que previo al inicio de acciones contra la Nación, las entidades territoriales o cualquier entidad de la administración pública habrá de agotarse un requerimiento ante la misma entidad.

Sobre el propósito de tal requisito, la Corte Constitucional en sentencia C -792 de 2006 señaló que el presupuesto de la previa reclamación ofrece a la administración la oportunidad de pronunciarse sobre los reclamos, pudiendo enmendar aquellos yerros cometidos, evitando que se acuda a instancias judiciales. También se indicó que no se trata de una inhabilidad permanente para el ejercicio de la acción judicial, en tanto se establece un término razonable de espera, que lo es de un (1) mes y transcurrido sin tener una respuesta de la administración, se entiende satisfecho el requerimiento, así indicó la Corte:

*De manera general puede decirse que la necesidad de agotar la vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas ante los tribunales. (...)*

*Esa previsión que obra en beneficio de la Administración Pública no puede convertirse, sin embargo, en un instrumento para que ésta eluda sus responsabilidades, ni constituirse en factor de indefensión de un administrado que, ante la falta de respuesta de la Administración, se vería imposibilitado para acudir ante la jurisdicción. Por ello, como factor de equilibrio entre la prerrogativa de la Administración y el derecho de acceso a la administración de justicia del administrado, la ley ha previsto la figura del llamado silencio administrativo negativo, por virtud de la cual, transcurrido cierto tiempo sin que la Administración responda, se entiende que la solicitud se ha denegado y a partir de ese momento el administrado queda habilitado para acudir ante los tribunales.*

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la CSJ respecto a la función de la previa reclamación señaló que, además de un requisito de la demanda, comporta un factor de competencia que debe verificarse para dar inicio a la acción laboral, pues en su ausencia, habrá de rechazarse, así indicó en sentencia de radicado 12221 de 1999.

Las anteriores interpretaciones jurisprudenciales permiten a esta Corporación concretar el propósito de la previa reclamación administrativa, la que más allá de un requisito formal de la demanda, permite agotar una etapa de autocomposición de la reclamación contra el Estado, que se entiende satisfecha ora con la respuesta efectiva, ora con el paso de un (1) mes de espera; reclamación que determina la competencia del funcionario judicial, no solo para efectos de dar inicio al trámite, pero además que delimita los aspectos sobre los cuales podrá pronunciarse el fallador.

Con estas premisas se descende al **CASO CONCRETO**, donde la controversia se delimita en establecer si previo a la radicación de la acción judicial se satisfizo el requisito de la reclamación administrativa, lo que en criterio de esta corporación no se cumplió con la solicitud elevada en marzo de 2023.

Para ello advierte la sala que contrario a lo manifestado por el recurrente no se trata de una simple formalidad para llegar a un resultado que él da por sentado (negación del derecho pensional), sino que permite adelantar un proceso de autocomposición, donde la administradora de pensiones, valora los presupuestos de hecho y pruebas que se aducen como creadoras del derecho y bajo un proceso de verificación de requisitos emite una decisión, sin que en todos los casos su respuesta sea negativa como generaliza la pasiva, muestra de ello es que no todas las reclamaciones pensionales requieren de intervención judicial.

Así pues, la previa reclamación administrativa no representa una traba al derecho pensional, como tampoco una condición que de forma particular se le esté exigiendo al ahora demandante.

Bajo estas premisas se tiene que la reclamación remitida el 29 de marzo de 2023, más allá de las dudas respecto a la efectiva remisión del documento que se presenta o la informalidad al no ajustarse a los formularios estandarizados que provee la entidad, no cumple con el propósito que persigue el artículo 6° del CPTSS, en tanto a través de su escrito la activa no ofrece un panorama completo del derecho que reclama, donde se conjugan múltiples condiciones que debieron ser demostradas y que conforme a la relación de anexos se hallan huérfanas de pruebas, es así que correspondía al actor acreditar cuando menos: la calidad de hijo de la causante y la alegada condición de invalidez, hechos que son ajenos a la Colpensiones y de suma relevancia para la decisión.

Nótese cómo de forma casi automática Colpensiones instruyó al apoderado del señor Tobón Loaiza en la documental que debía acompañar a su petición, lo que denota que no hubo una decisión de fondo, en este evento, por causas imputables al accionante, a quien le correspondía completar la documental, para que de esta forma la entidad pudiera emitir una respuesta de fondo o en su ausencia tras 1 mes de espera, aplicar la contestación ficta.

Falta de reclamación administrativa que tiene repercusiones en sede judicial para otorgar competencia al juez del trabajo, delimitar los aspectos que podrán ser objeto de acción judicial, además que, en caso de una eventual prosperidad de las pretensiones definiría la ocurrencia de la prescripción y el contingente acceso a intereses de mora, sirviendo como hito temporal para su contabilización, condiciones estas ausentes en la reclamación inicial y que fue ignorada por la parte, pese a las acciones de reconducción que emitió el despacho de origen.

En suma, en ausencia de la previa reclamación administrativa que comporta un elemento de satisfacción de la demanda en forma y habilitación de competencia para dar inicio al trámite judicial, el que fue advertido por el despacho e ignorado por la parte, hay lugar al rechazo de la demanda, conclusión a la que arribó el fallador de instancia y que se avala por esta corporación.

Resta por indicar que no se grava en costas a la parte actora en tanto el desarrollo del proceso no superó la etapa verificación de la demanda en forma y por tanto no existe una parte resistente que se beneficie de las mismas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** de forma total la providencia recurrida. Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen, para lo de su competencia.

**Los Magistrados,**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en  
Estados publicados por medios digitales el 03 de abril de 2024